

El Conacyt al final del actual sexenio

Juan Pedro Laclette

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es una institución pública que fue fundada en 1971 durante la administración del presidente Luis Echeverría; fue una de las pocas iniciativas verdaderamente positivas durante un sexenio recordado más bien por asuntos tristemente célebres. Desde entonces, ha venido apoyando el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) a través de múltiples acciones, entre las que destacan el financiamiento a proyectos de investigación científica y tecnológica en diversas disciplinas que se desarrollan en instituciones de todo el país, la descentralización de la investigación científica a través de la creación y el apoyo a centros de investigación, el otorgamiento de becas para alumnos que realizan estudios de posgrado, el apoyo a empresas que se comprometen con los procesos de innovación, el otorgamiento de estímulos económicos para mejorar el ingreso económico de los investigadores científicos en nuestro país, el apoyo a instancias que promueven el desarrollo de la CTI en prácticamente todas las entidades federativas del país (consejos estatales), así como las acciones continuas de comunicación de la ciencia para incrementar la conciencia social acerca de la importancia del conocimiento en el desarrollo de nuestro país.

Los avances en CTI durante las pasadas cinco décadas son considerables, a pesar de que todavía estamos muy por debajo de lo que sería recomendable para una economía del tamaño de la nuestra. Sin embargo, el patrimonio científico actual de México ya no es poca cosa: casi 50 000 científicos –entre ellos más de 29 000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores– y más de 220 centros e institutos de investigación en múltiples disciplinas, distribuidos en instituciones de educación superior públicas y privadas, así como en Secretarías de Estado y otras dependencias federales y estatales. El Conacyt es una institución con nobles fines, cuyo beneficio hacia la sociedad está fuera de duda.

Después de un inicio ciertamente alentador durante el actual sexenio, en el que parecía que finalmente el gobierno federal se comprometía con el apoyo a la CTI para aprovecharla como un motor principal en el desarrollo del país, durante los pasados tres años, quizá abrumado por los numerosos fracasos en otras áreas, disminuyó no sólo el interés y el financiamiento, sino que también se esfumaron

los compromisos referentes a CTI que se habían establecido en los documentos normativos del trabajo del gobierno federal al inicio del sexenio (Plan Nacional de Desarrollo, Programa Especial de Ciencia y Tecnología, etc.). La percepción social de que el actual sexenio ha sido al menos parcialmente fallido también se extiende a la CTI.

El Gasto en Investigación y Desarrollo (GIDE) es el estándar internacional para evaluar el tamaño de la inversión en CTI que realiza un determinado país. El GIDE tiene una definición aceptada en todo el mundo, referente a los rubros de gasto que se incluyen, que por lo tanto permite hacer las comparaciones entre las naciones. Aunque parezca un tecnicismo, es importante hacer notar que para evaluar la inversión en CTI no se debe usar el gasto federal, ya que cada país incluye partidas según su criterio; por ende, no se acepta a nivel internacional para hacer comparaciones entre países. Volviendo al GIDE, durante el actual sexenio pasamos de 0.44% en 2012 a 0.51% en 2018 del producto interno bruto nacional (PIB); es decir, ascendimos sólo 7 centésimas de punto, en lugar de alcanzar el 1% del PIB que se había prometido.

Conviene recordar que el GIDE se ejerce a través del Conacyt y de algunas Secretarías de Estado, como las de Educación Pública, Economía, Energía, Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Defensa, entre otras. De hecho, el Conacyt inició el sexenio operando alrededor de 42% del GIDE, y concluye operando poco menos de 34%. Esta reducción no sólo afecta el alcance de los programas que coordina el Conacyt, sino que también impacta la gobernanza del sistema de CTI, ya que su cabeza (Conacyt) vio disminuida la parte proporcional de la inversión en CTI que ejerce directamente. Lo que es peor: el Conacyt inició el sexenio operando un presupuesto equivalente a 1 600 millones de dólares estadounidenses y concluye operando uno equivalente a 1 400 millones. Por ello, no es de extrañar que por primera vez en 25 años el Conacyt limitó el número de becas entregadas a los programas de posgrado de todo

el país, acreditados en el Programa de Posgrados de Excelencia. Tampoco sorprende la crítica situación de la ciencia básica, que se encuentra en un estado de mera subsistencia, o bien el número de nuevos centros de investigación y de cátedras patrimoniales, que se encuentra muy por debajo de lo ofrecido al inicio del sexenio.

En contraste, en los últimos cinco años el gobierno federal ejerció un presupuesto que rebasa los 2 000 millones de dólares para utilizarlos en sus campañas de publicidad oficial (de acuerdo al informe de Fundar, Centro de Análisis e Investigación: *Contar lo bueno cuesta mucho, gasto en publicidad oficial del gobierno federal de 2013-2016*), que resonó de manera considerable a nivel mundial gracias a un artículo de Azam Ahmed aparecido en el *New York Times* el 25 de diciembre de 2017, con un título preocupante: “Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación”. Y más allá de la inquietud por la afectación a la libertad de expresión en los medios de difusión masiva —que es una de las libertades fundamentales en cualquier sociedad democrática—, a pesar de ese despilfarro en publicidad oficial, la percepción pública acerca del presidente Peña Nieto se mantiene entre los niveles de aceptación más bajos en la historia de nuestro país. La pregunta sería: ¿vale la pena invertir en contar lo bueno o en producir más cosas buenas?; por ejemplo, en educación y CTI.

Para concluir, retomamos una frase de Luis Antonio Espino en su artículo del 31 de agosto de 2017 en la revista *Letras Libres*, en el sentido de que “lo bueno también cuenta, pero hay que contarlo bien”; y nos atrevemos a agregar que lo malo también cuenta, por mucho que la propaganda oficial financiada por un presupuesto multimillonario (a expensas de programas de mayor importancia social, como el presupuesto del Conacyt) lo ignore. Concluimos mencionando que éste no será recordado como el mejor sexenio para el Conacyt ni para la comunidad científica del país.